SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 27/2013

Recomendación N°	27/2013
Autoridades Responsables	Secretario de Seguridad Pública del Estado
Expediente	3VQU-0050/13
Fecha de emisión	11 DE DICIEMBRE 2013
HECHOS	
<p>El 27 de abril de 2013, entre las 04:00 y 04:45 horas, en el Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí, un grupo aproximado de 150 a 200 reclusos, armados con pedazos de herrería, tubería, madera, así como puntas hechizas de material de fierro, salieron de sus estancias e ingresaron a las áreas de Nuevo Ingreso, Centro de Observación y Clasificación, Visita Íntima, así como a los dormitorios 1, 2 y 3, agrediendo a los internos de las mencionadas áreas, lo que arrojó como resultado la privación de la vida de 13 internos y la afectación a la integridad personal de más de 80 reclusos.</p> <p>De acuerdo con la información que proporcionaron diversos internos que resultaron lesionados en el citado acontecimiento, los autores del ataque provenían de los dormitorios 4, 5 y 6, y que a la hora en que se presentaron los hechos, las celdas no contaban con cerrojos, lo cual permitió que los agresores se agruparan e ingresaran a los dormitorios 1, 2 y 3, así como a las áreas de Nuevo Ingreso, C.O.C., Anexo Juvenil y Visita Íntima.</p> <p>En la declaración que vertieron ante personal de este Organismo Público Autónomo, los citados reclusos manifestaron que los elementos de Seguridad y Custodia que se encontraban asignados a los dormitorios, al darse cuenta de la presencia del grupo agresor, salieron de prisa, sin aplicar ninguna medida de contención. Por otra parte, los elementos de custodia asignados a los dormitorios 4 y 6, manifestaron que decidieron permanecer encerrados en las esclusas de sus dormitorios, para evitar ser lesionados por los internos agresores.</p>	
Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Derecho a la Vida ✓ Derecho a la Integridad y Seguridad Personal ✓ Derecho a la Protección de la Salud
OBSERVACIONES	
<p>El 27 de abril de 2013, entre las 04:00 y 04:45 horas, un grupo de reclusos, quienes estaban asignados a los dormitorios 4, 5 y 6, salieron de esas estancias llevando consigo piedras y armas hechizas, tales como pedazos de madera y herrería, tubería, madera, puntas de hierro hechizas, e ingresaron a las siguientes áreas del Centro: Médica, Visita Íntima, Nuevo Ingreso, Centro de Observación y Clasificación, así como a los dormitorios 1, 2 y 3, y agredieron a diversos reclusos que se alojaban en esas áreas.</p> <p>Se observó que los encargados de la seguridad y custodia, en el día de los hechos no tomaron acciones</p>	

efectivas para el resguardo del orden y la seguridad interna del Centro, así como la protección de la integridad de las personas; es decir, se evidenció que tuvieron conocimiento del desplazamiento de internos que salían de unos dormitorios, y libremente se dirigían a otras áreas del establecimiento, sin restricción alguna, y en horario que deberían estar bajo resguardo en las estancias asignadas, sin que se hayan advertido acciones o medidas de contención o protección por parte del personal de custodia.

En este orden de ideas, de los elementos que se recabaron durante la investigación del caso, además de las omisiones en la vigilancia, se observó que el día de los hechos en el establecimiento penitenciario no se cubrieron los servicios de custodia en las áreas de visita íntima, edificio técnico, esclusas 23, 24, 26, 29, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 62, 64, ni en las torres de vigilancia 1 y 12. Se detectó también que las cámaras de circuito cerrado ubicadas en el área de seguridad individual, en la barda de servicios generales y en el módulo de sentenciados no estaban funcionando, y que en la exclusiva 46, el pasillo de subdirección laboral, así como el módulo de la clínica, no tenían cámaras de circuito cerrado el día de los hechos.

Si bien es cierto que de los testimonios se obtuvo que en algunas áreas del Centro los internos agresores rompieron los candados para ingresar, también los es que otros testimonios refieren que no tenían candados las cerraduras de las celdas, como la declaración de AR20, responsable de esclusa 21 del dormitorio 1, quien manifestó que no cerró las celdas de cada sector, ya que no existían candados, ya que solamente se colocaban en las rejas de ingreso a los citados sectores.

En suma, las omisiones en la vigilancia, la falta de personal de seguridad y custodia, la falta de acciones o medidas de contención y protección, fueron factores que aprovechó un grupo de internos para agredir a otros y causaron la muerte de 13 personas y lesiones a más de 80. De la evidencia se advierte que debido a los golpes recibidos, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, V9, V11, V12 y V13 fallecieron por traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos; V7 a causa de choque hipovolémico, lesión esplénica y renal, y herida por arma blanca penetrante de abdomen, y V10 a causa de contusiones pulmonares y cardíaca, traumatismo cerrado profundo de tórax y politraumatismos.

Respecto de las personas que resultaron lesionadas, las víctimas identificadas de V14 a V52, dada la gravedad de sus lesiones fueron trasladadas a los Hospitales General de Soledad y Central "Ignacio Morones Prieto", y de los certificados médicos que se agregaron a la Averiguación Previa 2, se desprende que en su mayoría presentaron lesiones contusas, fracturas, múltiples heridas, escoriaciones y equimosis en distintas partes de su cuerpo. Las víctimas lesionadas, de V53 a V99, que de acuerdo a los datos recabados por personal de este Organismo no requirieron internamiento hospitalario, sin embargo también presentaron lesiones contusas y múltiples escoriaciones.

De acuerdo con la evidencia, es posible advertir que la actuación omisa de los elementos de custodia, los hace

imputables de las lesiones que presentaron de V14 a V99, así como de la pérdida de la vida de V1 a V13, desde el punto de vista institucional, ya que desatendieron completamente su posición de garantes de la integridad y seguridad personal y de la vida de las personas, ya que además reflejaron la falta de compromiso con la cultura de la legalidad, y de la efectiva protección y defensa de los derechos humanos, incumpliendo con el deber de proteger y garantizar los derechos humanos, en los términos del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También dejaron de observar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 3 y 5, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en que se señala, en términos generales, que éstos deben cumplir en todo momento con los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, además de asegurar la plena protección de las personas bajo su custodia.

Con base en los anteriores señalamientos, se considera pertinente que para garantizar una adecuada vigilancia de la población reclusa en el CERESO “La Pila”, así como ofrecer una estancia digna y segura, la autoridad penitenciaria debe llevar a cabo acciones y realizar las gestiones ante quien corresponda, encaminadas a incrementar la plantilla del personal de seguridad y custodia.

Consecuentemente, esta Comisión Estatal considera que los servidores públicos encargados de la custodia del Centro de Reinserción Social en los hechos del 27 de abril de 2013, no cumplieron adecuadamente con la función de proteger la vida, la integridad y seguridad personal de los internos bajo su custodia, omitiendo llevar a cabo acciones eficaces y oportunas para garantizarlos, vulnerando con esa omisión lo dispuesto en el artículo 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que todo maltrato en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

En otro aspecto, de la información que se recabó para la investigación de estos hechos, se advirtió que hubo retraso en la atención a los lesionados; es decir, la evidencia refiere que fue a partir de las 06:46 horas, cuando ingresó personal paramédico de servicios de salud, al área de aduana, para prestar auxilio y atención a las personas que resultaron con lesiones. Aunado a lo anterior, se pudo observar también que el personal médico adscrito al Centro de Reclusión desde el momento que fue activada la alarma de emergencia. Al respecto, la Directora General de Prevención y Reinserción Social precisó que había ordenado que la plantilla laboral de 14 médicos y 12 enfermeros acudieran de inmediato a prestar auxilio a los lesionados; sin embargo, solamente atendieron su llamado dos médicos y un enfermero, resultando insuficiente ante el número de personas que requerían la atención médica, algunos de urgencia.

Tampoco se observaron los artículos 52.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; 9 de los

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; 22, 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y X de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los que señalan el derecho a la salud de toda persona privada de su libertad, a recibir una atención médica cuando sea necesaria, que el personal médico acuda sin dilación cada vez que se presente un caso urgente, y se disponga de personal calificado para atender las necesidades médicas.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se proceda a la reparación del daño en favor de las víctimas, o de quien acredite tener derecho, la cual incluya el tratamiento psicológico o médico necesario para restablecer la salud física o emocional de las personas que resultaron lesionadas y que lo requieran.

SEGUNDA. Se de vista órgano interno de control en la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos señalados en los hechos.

TERCERA. Realice las gestiones pertinentes a efecto de que se proporcionen los recursos suficientes para llevar a cabo adecuaciones de infraestructura penitenciaria en el Centro de Reinserción Social “La Pila”, a fin de que se garantice una estancia digna y segura a la población penitenciaria, se dispongan de espacios suficientes para su alojamiento.

CUARTA. Se lleven a cabo las acciones pertinentes para que se asigne o contrate personal técnico penitenciario, capacitado y profesional, médico y de enfermería para atender los tres turnos, así como elementos de Seguridad y Custodia para cubrir las necesidades del Centro de Reinserción Social “La Pila”, suficiente para garantizar el orden, la seguridad interior y el respeto de los derechos humanos.

QUINTA. Se proporcione capacitación continua al personal de Seguridad y Custodia, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, para atender contingencias o motines en los Centros Estatales, con el objeto de que se resguarde el orden y seguridad en el interior de los mismos.

SEXTA. Se diseñe y expida, un Protocolo o Manual de Procedimientos, por parte del personal de Seguridad y Custodia y de la Secretaría de Seguridad Pública, relativo a la atención y manejo de contingencias y motines en los Centros de Reclusión o de Internamiento, con el objeto de que se resguarde el orden y seguridad al interior de los mismos, y se garantice el respeto de los derechos humanos.